

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, dos (02) de marzo de 2023

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310501520170035801, promovido por **GILBERTO HINCAPIÉ SOTO** en contra de **COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el ocho (8) de marzo del año dos mil dieciocho (2018).

De conformidad con el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los

procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **053**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor Gilberto Hincapié Soto, instauró acción judicial, pretendiendo el pago del retroactivo generado por el reajuste pensional, reconocimiento mediante Resolución GNR 129767 de mayo 2 de 2016 desde el 13 de abril de 2011 hasta el 12 de abril de 2012, así como la indexación de las mesadas pensionales causadas desde el 13 de abril de 2012 hasta el 30 de mayo de 2016 que fueron pagadas en la nómina de junio de 2016, la indexación de las condenas y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que en su calidad de profesional de la salud trabajó en varias entidades con aportes al sistema general de pensiones, y para el Instituto de Seguros Sociales con quien, mediante sentencia judicial se le reconoció la existencia de un contrato realidad desde el 15 de agosto del año 1995, se ordenó su reintegro y fue retirado finalmente en diciembre 19 de 2004 por el reconocimiento de la pensión de jubilación de origen convencional, mediante resolución 007 de enero 7 de 2005, en cuantía equivalente a \$2.811.019 desde el 20 de diciembre del año 2004. El Instituto de Seguros Sociales como administrador del Régimen de Prima Media, reconoció pensión de vejez de origen compartido mediante resolución 9077 de 20 de mayo del año 2010, en cuantía inicial de \$2.878.104 desde enero 2 de 2006, y en dicho acto administrativo, se ordenó el pago de un retroactivo pensional en cuantía de \$192.148.579 entre 2 de enero de 2006 y 31 de mayo del año 2010 a favor del ISS empleador.

Explicó que en septiembre de 2013, se elevó petición ante el Instituto de Seguros Sociales, con el fin de obtener el pago de los aportes al sistema general de pensiones, por el tiempo comprendido entre 15 de junio de 1995 y junio de 2004, y ante dicho pago, se modificó sustancialmente el IBC, por lo cual, solicitó un nuevo estudio pensional, lo cual fue atendido en Resolución 129767 de 2016, que ordenó la reliquidación, reajustándose conforme el decreto 758 de 1990, con 1.458 semanas, tasa de reemplazo de 90%, con un IBL de \$9.139.186 y una mesada inicial de \$8.225.267, se reconoció un retroactivo pensional en suma de \$236.592.230, resolución que fue recurrida, pues solicita la revisión y ajuste del IBL además de solicitar el retroactivo desde abril 13 de 2011 conforme el decreto 758 de 1990 en su artículo 50 así como la indexación de las mesadas pensionales desde 13 de abril de 2011 hasta mayo del año 2016 y el reembolso de los descuentos realizados por salud que habían sido pagados por medio de la UGPP entre 2011 y 2016, empero Colpensiones confirmó el acto administrativo.

Admitida la demanda mediante auto del cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017), y notificado a la pasiva, dio respuesta al libelo gestor indicando sobre los hechos narrados:

Que es cierto el reconocimiento de la pensión de jubilación y la pensión de vejez, así como lo dicho en los actos administrativos dados por Colpensiones, pero se opone a la prosperidad de las pretensiones incoadas e interpuso como previas las excepciones que denominó: *“Inexistencia de la obligación de pagar retroactivo pensional y mesadas adicionales”*, *Improcedencia de la indexación de las condenas*, *“prescripción”*, *“compensación y pago”*, *“imposibilidad de condena en costas”*

En sentencia proferida el ocho (8) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, absolvió de la totalidad de las pretensiones invocadas en la demanda, y declaró probada la excepción de *“inexistencia de la obligación”*.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte actora, interpuso recurso de alzada, argumentando que, se aparta de las conclusiones dadas por la juez de instancia, pues lo pretendido no es el pago de dos prestaciones sino, el mayor valor resultante de la diferencia pagada entre Colpensiones y el ISS como empleador, igualmente, solicita de manera respetuosa que, extra petita se revise la liquidación realizada por Colpensiones pues estima que el IBL calculado es inferior al que tiene derecho el demandante, y por ende solicita se revoque la sentencia de primera instancia, pues esgrime que ha habido un gran detrimento al demandante desde el año 2006 hasta el año 2013 que se le reajustó la mesada pensional, las indexaciones debidas.

Corrido el traslado para alegar, la parte actora, en término oportuno, solicita que sea revocada la sentencia de primera instancia y se concedan las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta los argumentos elevados en el recurso de apelación, pues lo que se pretende no es doble pago, ya que se aportaron como pruebas visibles a página 88 del expediente digital los acumulados de pagos de la pensión pagada desde el año 2004-07 hasta 2013-08 y lo pedido es el mayor valor resultante de restar a la pensión de jubilación pagada, la pensión que pago el ISS como empleador. Igualmente expuso que, para el 2011 quedo la mesada pensional en cuantía de \$7.929.497 y de acuerdo a folio 82 el ISS solo pagó \$3.893.453, por lo cual, en el año 2011 se adeuda la suma de \$4.039.044 por cada mesada pensional

reconocida. Recuerda que en el recurso de alzada solicitó también que extra petita se realizara la reliquidación del IBL del actor, desde el año 2011. Igualmente, se tenga en cuenta para la liquidación la prescripción establecida en el artículo 50 del Decreto 758 del año 1990 de 4 años, con la indexación por la pérdida del poder adquisitivo en el transcurso del tiempo.

Colpensiones, en sus alegatos, solicitó acoger la sentencia proferida por el juzgado, pues en la resolución GNNR 129767 se 2016 se liquidó una pensión de vejez de carácter compartida de conformidad con el decreto 758 de 1990 en aplicación al régimen de transición con una mesada pensional en cuantía de \$8.225.267, con fecha de estatus de 20 de abril de 2005 y efectividad de 13 de abril de 2012. Explica que el retroactivo reconocido de \$236.592.230 se ingresó a nómina de mayo de 2016 a favor del empleador UGPP de acuerdo a la sentencia bajo radicación 32010 de 2008, por tanto, solicita se confirme la decisión de primera instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico, de esta instancia, consiste en determinar, si el demandante tiene derecho al pago del retroactivo pensional correspondiente al reajuste reconocido en la resolución 129767 de 2 de mayo de 2016, causado el 13 de abril del año 2011 y hasta el 12 de abril de 2012, a la indexación de dichas mesadas pensionales, a la indexación de las mesadas causadas desde el 13 de abril de 2011 hasta el 30 de mayo de 2016 pagadas en nómina de junio de 2016.

CONSIDERACIONES

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

En el expediente, se encuentra debidamente acreditado, conforme a Resolución 007 del año 2005, que se le reconoció al demandante pensión de jubilación en cuantía de \$2.811.019, con efectos fiscales a partir el 20 de diciembre del año 2004, página 14 a 21 del expediente digital.

Dicha prestación contaba con la vocación de compartida, en atención a lo dispuesto en el Decreto 2879 de 1985 por el cual se aprueba el acuerdo número 029 del 26 de septiembre de 1985, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales obligatorios, artículo que disponía:

Artículo 5º Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la fecha de publicación del decreto que apruebe este Acuerdo, otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de Vejez y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.

Igualmente, la Ley 6ª de 1945 en su artículo 12 estableció:

“...Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las siguientes indemnizaciones o prestaciones para con sus trabajadores ...”.

Por su parte Acuerdo 049 de 1990 reguló:

ARTÍCULO 18. COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.

Así pues, como desde la fecha de publicación del Acuerdo 029 de 1985, todos los empleadores que estuvieren adscritos al entonces Instituto de Seguros Sociales que reconocieran pensiones de jubilación consagradas en convenciones colectivas, pactos colectivos o laudos arbitrales, debían continuar cotizando a favor de sus trabajadores para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ello, hasta que sus trabajadores cumplieran con los requisitos exigidos por el Seguro Social, y la entidad iniciara el pago de la prestación que corresponda. Ocurrido ello, la entidad tiene la obligación de cancelar SOLAMENTE el mayor valor de la prestación que hubiere otorgado, en el caso de existir alguna diferencia, figura que ha sido recordada por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia SL 2759 de 2 de agosto de 2022 y SL224-2021, que reiteró lo sostenido en la CSJ

SL, 21 mar. 2012, rad. 38577, en donde se analizó un asunto similar al que ahora ocupa nuestra atención, precisándose:

“En su tarea de esclarecer los contenidos de tales reglamentos, para ponerlos a tono con el plexo normativo legal, la jurisprudencia de esta Corte pasó de proclamar la concurrencia de la pensión restringida de jubilación (a cargo del empleador) y la pensión de vejez (a cargo del Instituto de Seguros Sociales) a predicar la exclusión de los dos beneficios para un contingente de trabajadores, hasta llegar, con amparo en el Acuerdo 049 de 1990, a la admisión de su compatibilidad, en el sentido de que el empleador estaba obligado a reconocer al trabajador la pensión restringida de jubilación, una vez actualizada la hipótesis legal, la que debía pagar hasta el momento en que el Instituto de Seguros Sociales otorgara la pensión de vejez, caso en el cual el empleador solo quedaba a deber el mayor valor entre la pensión restringida de jubilación y la de vejez, si lo hubiere.”

...

Es claro que, encontrándose el actor recibiendo la pensión de jubilación en cuantía de \$2.811.019, se expidió por parte del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en calidad de Administrador del régimen de Prima Media, acto administrativo 009077 de 2010 en el cual, se enuncia que, debe reconocerse una mesada pensional en cuantía de \$2.878.104 desde el 2 de enero del año 2006, quedando obligado el empleador a seguir cancelando sólo el mayor valor adeudado, y por tal motivo el retroactivo fue girado a su empleador.

En el caso del señor Hincapié Soto, hay que tener en cuenta que su vinculación, con ISS empleador, fue objeto de una declaración judicial, por lo tanto, el pago de los periodos de cotizaciones se dio de manera tardía, y ante su pago, tuvo lugar la resolución GNR 129767 de 2 de mayo de 2016, la cual, con la totalidad de semanas cotizadas por el empleador ISS, incrementó con su IBL, y se concluyó que la reliquidación era procedente, teniendo en cuenta aquello que no había sido afectado por la prescripción, generándose la reliquidación de la pensión de vejez, desde el 13 de abril del año 2012, quedando para ese año una

mesada pensional en cuantía de \$8.225.267 y girando el retroactivo pensional causado a favor de UGPP.

Son varios los reparos dados por la parte actora, siendo pertinente el estudio de éstos por separado.

Retroactivo entre 13 de abril del año 2011 y el 12 de abril del año 2013

Argumenta la parte demandante que, el periodo de prescripción tomado por la entidad debió ser el establecido en el acuerdo 049 de 1990, correspondiente a cuatro años, (4), por lo cual, el retroactivo debió pagarse desde el 13 de abril del año 2011 y no, desde el 12 de abril del año 2013. Sin embargo, es importante precisar que, si bien la prestación del demandante fue reconocida como beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, aplicando, la densidad de semanas, monto y edad del régimen anterior que le era aplicable, en su caso, el acuerdo 049 de 1990, también lo es que, la prestación como tal se encuentra reconocida en aplicación al sistema general de pensiones de la ley 100 de 1993 que en su artículo 36 trae este beneficio temporal, empero, en su contexto, el término prescriptivo de cuatro (4) años, reglado en el acuerdo 049 de 1990, quedó sin vigencia al ingreso a la vida jurídica de la ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrado Ponente Luis Gonzalo Toro Correa, Radicación No. 14.184. 26 de septiembre de 2000, explicó respecto al tema lo siguiente:

“(…), la pensión de jubilación por ser una prestación social de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en si mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar por espacio de tres años, y además, trae aparejada una situación jurídica

regulada por la ley que, entre otras cosas, incluye los reajustes económicos de tal derecho. Estos reajustes como integrantes del status pensional son consustanciales a él y, por ende, no prescriben en cuanto tales, sino en tanto afectan la cuantía de determinadas mesadas. De suerte que la potencialidad del reajuste legal no desaparece por prescripción con arreglo a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral, sino que se extingue la incidencia que el ajuste pudo haber tenido en ciertas mensualidades que se percibieron sin que el acreedor hubiera objetado su cuantía durante el término prescriptivo de tres años ...”.

No encuentra en este proceso la Sala fundamento alguno, para ordenar el pago de las mesadas pensionales desde el 13 de abril del año 2011, pues si bien se predicó una mora del ISS empleador en efectuar el pago de las cotizaciones, también existió una ausencia por parte del trabajador en el reclamo de ello, pues anterior al 13 de abril del año 2015 fecha de la radicación de petición 2015_3214041 página 29 del expediente digital, no se observa petición alguna encaminada a la reliquidación de la pensión de vejez, siendo correctamente aplicado el término prescriptivo por parte de Colpensiones, al tomar 3 años, como lo establece la especialidad laboral y seguridad social.

Consecuente a ello, se absolverá a la pasiva del pago del mayor valor causado entre el 13 de abril del año 2011 y el 12 de abril del año 2012, y por tanto no hay lugar al pago de indexación alguna por dicho periodo por las razones expuestas, las cuales son diferentes a lo enunciado por la juez de primera instancia.

MAYOR VALOR CAUSADO POR RETROACTIVO PENSIONAL

Teniendo en cuenta lo ya expresado, que la reliquidación era procedente desde el 13 de abril del año 2012, conforme el reconocimiento pensional efectuada por el empleador ISS y la pensión de vejez reconocida y reliquidada por

Colpensiones, se entienden los siguientes reconocimientos a favor del demandante conforme las pruebas aportadas en pdf 02Demanda, página 88 a 104:

	IPC	PENSIÓN DE JUBILACIÓN		
2004	5,50%	\$ 2.811.019		
2005	4,85%	\$ 2.965.625	PAGADO EN RESOLUCIÓN 9077 DE 2010	
2006	4,48%	\$ 3.109.458	\$	2.878.104
2007	5,69%	\$ 3.248.762	\$	3.007.043
2008	7,67%	\$ 3.433.616	\$	3.178.144
2009	2,00%	\$ 3.696.974	\$	3.421.907
2010	3,17%	\$ 3.770.914	\$	3.490.346
2011	3,73%	\$ 3.890.452	\$	3.600.990
2012	2,44%	\$ 4.035.566	\$	3.735.306
2013	1,94%	\$ 4.134.034	\$	3.826.448
2014	3,66%	\$ 4.214.234	\$	3.900.681
2015	6,77%	\$ 4.368.475	\$	4.043.446
2016	5,75%	\$ 4.664.221	\$	4.317.187
				ordenado en resolución GNR 129767 DE 2016
			\$	8.225.267
			\$	8.425.964
			\$	8.589.428
			\$	8.903.801
			\$	9.506.588

Nótese que, si bien la pensión de jubilación es de carácter temporal, y debe pagarse sólo el mayor valor, de haberlo, con la pensión reconocida por el sistema general de pensiones, en el caso de autos se dio una situación diferente, es decir, la pensión reconocida por Colpensiones fue superior desde la resolución GNR 129767 de 2016, y, por ende, el retroactivo pensional de la diferencia, evidentemente no pertenecía al empleador, sino, por el contrario, al trabajador, asistiéndole razón a la parte demandante en sus pretensiones, pues no puede girarse al empleador un valor como retroactivo, que nunca canceló al demandante.

	PENSIÓN DE JUBILACIÓN	PAGADO EN RESOLUCIÓN 9077 DE 2010			
201 1	\$ 3.890.452	\$ 3.600.990	ordenado en resolución GNR 129767 DE 2016	DIFERENCIA PENSIONAL MENSUAL RETROACTIVO A CARGO DE UGPP	Diferencia a favor del pensionado por mes
201 2	\$ 4.035.566	\$ 3.735.306	\$ 8.225.267	\$ 300.259	\$ 4.189.702
201 3	\$ 4.134.034	\$ 3.826.448	\$ 8.425.964	\$ 307.586	\$ 4.291.930
201 4	\$ 4.214.234	\$ 3.900.681	\$ 8.589.428	\$ 313.553	\$ 4.375.194
201 5	\$ 4.368.475	\$ 4.043.446	\$ 8.903.801	\$ 325.029	\$ 4.535.326
201 6	\$ 4.664.221	\$ 4.317.187	\$ 9.506.588	\$ 347.033	\$ 4.842.367

Es evidente que, si bien el ISS en calidad de empleador continuó con el pago del mayor valor de acuerdo a las pruebas aportadas con la demanda, el valor que debió cancelarse a favor del trabajador es superior, y por ello, si bien Colpensiones en principio debe reintegrar al empleador un porcentaje del mayor valor cancelado, no todo corresponde ser pagado al empleador, pues se insiste, éste solo canceló la suma necesaria para aparejar la prestación que reconoció inicialmente la reconocida por Colpensiones, siendo inevitable que la diferencia existente entre la pensión de jubilación y la pensión de vejez reconocida en resolución GNR 129767 de 2016, deba ser cancelada al actor, y la diferencia existente entre la pensión de jubilación y lo reconocido en resolución 9077 de 2010, deba ser reintegrado al empleador, quien lo canceló con el fin de pagar un mayor valor que con la resolución inexistente GNR 129767 de 2016 queda inexistente.

DIFERENCIA PENSIONAL MENSUAL RETROACTIVO A FAVOR DE UGPP	Diferencia a favor del pensionado por mes
\$ 300.259	\$ 4.189.702
\$ 307.586	\$ 4.291.930
\$ 313.553	\$ 4.375.194
\$ 325.029	\$ 4.535.326
\$ 347.033	\$ 4.842.367

Así las cosas, adeuda la pasiva a favor del demandante la diferencia pensional, respecto a cuyo retroactivo debe realizar las deducciones en salud, de acuerdo al artículo 143 de la Ley 100 de 1993, y lo expuesto en reiteradas oportunidades por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias SL 1195 del 29 de enero de 2014, radicación 48.918, SL 9782 del 23 de julio de 2014, radicación 54.583; SL 10143 del 30 de julio de 2014, radicación 45.232; SL 13547 del 1 de octubre de 2014 radicación 47.264.

INDEXACIÓN DE LAS MESADAS RECONOCIDAS Y PAGADAS EN NÓMINA DE JUNIO DE 2016

En efecto, es claro que en resolución 129767 de mayo del año 2016, se ordenó el mayor valor de las mesadas pensionales, causadas desde 13 de abril del año 2012, sin que se pague por esta diferencia pensional indexación alguna ante la pérdida de poder adquisitivo de dichas sumas. Se ordenará por ello, a la pasiva, que, al momento de realizar el pago al demandante, procesa a indexar, el mayor valor ordenado.

Sin embargo, respecto a las mesadas pensionales no se ordena la indexación, pues lo pretendido por el recurrente es el incremento de ellas, sin que sea posible, pues su cálculo fue efectuado con el IPC de cada año, situación corroborada por el despacho, sin que haya lugar a un incremento adicional, como se observa:

2012	2,44%	\$	8.225.267
2013	1,94%	\$	8.425.964
2014	3,66%	\$	8.589.428
2015	6,77%	\$	8.903.801
2016	5,75%	\$	9.506.588

No es procedente pues, indexación alguna respecto a las mesadas como tal.

De conformidad con el artículo 8 de la ley 797 de 2003, en su literal d., se autoriza el descuento del 1% en favor del fondo de solidaridad pensional, al tratarse de una mesada superior a los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, y mientras subsista dicha circunstancia.

Igualmente se autorizará a COLPENSIONES, para efectuar el descuento en salud sobre el valor del retroactivo ordenado.

Sobre los valores objeto de descuento para cotización en salud, y Fondo de Solidaridad Pensional no se liquidará indexación a favor del actor.

Respecto a la petición de dictar una providencia extra petita en lo referente a la liquidación del IBL del demandante, no se cumplen las reglas para ello dadas en la sentencia SL 3614-2020, pues la historia laboral consolidada no reposa en el expediente, ni tampoco el IBL fue discutido en el proceso, sin que sea posible, hacer pronunciamiento respecto a éste.

Conforme lo explicado se REVOCARÁ INTEGRAMENTE la sentencia proferida el ocho (8) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, revisada en apelación.

Costas a cargo de Colpensiones, en la suma de \$1.160.000.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Condenar a Colpensiones a pagar al señor Gilberto Hincapié Soto a pagar el mayor valor causado entre la mesada de Jubilación reconocida por Instituto de Seguros Sociales en calidad de empleador y la mesada reconocida en Resolución 129767 de 2 de mayo del año 2016 por Colpensiones, desde el 13 de abril del año 2012 al 30 de abril del año 2016, valor que deberá ser indexado desde la causación del mayor valor de cada mesada hasta el momento del pago efectivo del mismo, retroactivo que, asciende a la suma de \$250.943.154 (doscientos cincuenta millones novecientos cuarenta y tres mil ciento cincuenta y cuatro pesos).

TERCERO: Autorizar a Colpensiones a realizar las deducciones encaminadas a los reajustes retroactivos en salud sobre lo adeudado, y del aporte al fondo de solidaridad pensional, conforme lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia, sumas resultantes sobre las cuales no se causará indexación en favor del actor.

CUARTO: Absolver a Colpensiones de las demás pretensiones invocadas en su contra por las razones expuestas.

RUN 05001310501520170035801

QUINTO: Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones, en la suma de \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2a9491c5c9c8ff7d2e05abc5750b2b842e6daf6b0de997dca6f1498781e8a4bb**

Documento generado en 02/03/2023 01:29:18 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>